



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

S. M. de Tucumán,

de 2022.

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 28 de Julio de 2021 del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán; y

CONSIDERANDO

I) Que contra la resolución de fecha 28 de Julio de 2021, que dispuso: “I) *SOBRESEER en la presente causa a PEDRO BENITO BENEJAM en relación al hecho por el cual fuera indagado, delito previsto y penado por el Art. 1 y 2 incs. a), b) y d), de la Ley N° 24.769 (conf. modif. introducida por Ley N° 27.430), en mérito a lo considerado precedentemente, conforme lo normado por el art. 19 de la mencionada ley, y art. 336 inc. 3 del Código Procesal Penal de la Nación ...*”; el Fiscal Federal deduce recurso de apelación a fs. 120/121.

Que en esta instancia, en oportunidad de la audiencia fijada a los fines del art. 454 CPPN, el señor Fiscal General, a fs. 135/141, expresa agravios donde solicita, en resumen, que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto oportunamente y mantenido en esta Fiscalía General; se revoque el sobreseimiento dictado a favor de Pedro Benito Benejam, en atención a los motivos expuestos; se ordene continuar la presente investigación según su estado.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

II) Entrando al análisis de la cuestión traída a consideración del Tribunal, tras analizar la totalidad de las constancias de autos, se pronuncia por confirmar la resolución de fs. 112/119, venida en apelación, compartiéndose los argumentos del juez *a-quo*.

Previo al ingreso al tratamiento corresponde destacar que la presente denuncia lo fue por montos que tienen como base determinaciones de oficio sobre base cierta y otros sobre base presunta.

Que estos últimos (montos determinados sobre base presunta), a tenor de lo previsto en la nueva ley Penal tributaria, en cuanto dice que no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, en el caso Ley 11.683 y modificatorias, ello sin más elementos de prueba, corresponde confirmar el sobreseimiento dispuesto por el juez *a-quo*.

En efecto la Ley 27.430 establece en el TÍTULO IX - RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO, ARTÍCULO 279. Apruébase como Régimen Penal Tributario el siguiente texto: “Título V. artículo 19 expresa que “El organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando surgiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible dadas las circunstancias del hecho o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnico contables de liquidación. Asimismo y exclusivamente a estos efectos, podrá tenerse en consideración el monto de la obligación evadida en relación con el total de la obligación tributaria del mismo período fiscal”.

“Del mismo modo, no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existieren otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito”.

“La determinación de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada mediante decisión fundada con dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia y siguiendo el procedimiento de contralor que al respecto se establezca en la reglamentación”.

Cabe destacar lo considerado por el juez instructor, en el auto apelado, por cuanto del informe evacuado por la AFIP-DGI de fs.107 “no surgen nuevos elementos que permitan determinar la responsabilidad penal del encartado. En efecto, el organismo recaudador se remitió a consideraciones ya incorporadas en autos, por las cuales reiteró que el cálculo de las ventas siempre será





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

sobre base presunta; y, en relación a los débitos fiscales, sostuvo que la determinación de oficio se realizó sobre base presunta. Vale decir, no acreditó los extremos que requiere la probanza de una actividad dolosa por parte del encartado; y, por ende, sin dar cabal cumplimiento con los lineamientos requeridos en la confección de dicho informe, según la resolutoria de falta de mérito. En este sentido, y conforme lo fuera valorado en la resolución señalada precedentemente, solo se realizaron determinaciones de oficio sobre base cierta en lo atinente a las facturas de ventas manuales no registradas ni declaradas, por las sumas de \$20.451,82 y \$1.620,61; las diferencias de ventas mediante controladores fiscales por las sumas de \$131.978,23 en 2012 y \$1.176.175,56 en 2013; y, la impugnación de créditos fiscales previstos en el decreto 814, por las sumas de \$300.380,76 en 2012 y \$351.544,60 en 2013. Es decir, todos estos montos resultan ínfimos en relación a los montos enrostrados.

En consecuencia, y si bien la determinación de oficio practicada por el fisco tiene sustento parcial en base cierta, lo cierto es que, en la composición del monto global del supuesto perjuicio, los montos que corresponden a presunciones son proporcionalmente mucho más elevados. Más aún, ello también surge de las propias resoluciones determinativas emitidas por el Fisco Nacional, de las que se desprende que el débito fiscal se determinó sobre base presunta (ver resoluciones de fecha





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

17/3/2017 –fs. 520/535- del Legajo IVA OI 890.515 y 29/12/17 – fs. 101/112- del Legajo IVA O.I. 1.449.143).

De esta forma, podría afirmarse que, ante la falta de certeza en la determinación del impuesto evadido, no existe posibilidad de atribuir penalmente una conducta evasiva a un sujeto. Pues, reitero, las conclusiones a las que arriba el Fisco Nacional, entre ellas: “presumiendo también que la carne faenada propiedad de los contribuyentes apócrifos es propiedad del frigorífico (art. Agregado a continuación del art. 18 de la ley 11.683 conf. Ley 27.430) v. fs. 75 vta.-, es una presunción sin contar con otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del hecho ilícito”.

Es de destacar que la gran mayoría de la doctrina entiende que el empleo de presunciones para la determinación de la materia imponible no resulta suficiente para la radicación de una denuncia penal.

Entre los principales argumentos se destacan: Improcedencia de trasladar el sistema de presunciones de la ley 11.683 al proceso penal, ya que en él se invierte la carga de la prueba (CJSN, “Montenegro Hermanos SA s/ DGI” fecha 24/08/2000 y “Casa Elen-Valmi de Claret y Garelló” del 31 de marzo de 1999).

Por último se considera que, la nueva normativa ayuda a erradicar del espectro punitivo causas que involucren ajustes





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

técnicos, errores, o determinaciones de oficio formuladas únicamente sobre la base de presunciones. A más de ello, se considera que tampoco deben prosperar las denuncias en las cuales el ajuste sobre base cierta represente un monto ínfimo con respecto al saldo del ajuste sobre base presunta. En el caso el 99,17% de ajuste sobre base presunta, conforme el informe agregado a fs. 94/97, del CPN Abelardo García.

Respecto a los montos determinados sobre base cierta objeto de la presente denuncia, asimismo el tribunal se pronuncia por confirmar la resolución de fs. 112/119, venida en apelación, al no superar el elemento del tipo objetivo -hoy de \$1.500.000- conforme el art. 1º de la Ley 27.430.

Que en este sentido se ha expedido esta alzada en las causas: “Colegio Santo Tomás SRL y otro S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 3383/2016/CA1; “Serimaza SRL S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 23055/2017/CA1; “Barenbreuker y Asociados SRL S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 9632/2018/CA1; “Citrusvil S.A. S/ Infracción Ley 24769”, Expte. N° 2211/2107/CA1; “Colegio del Aconquija SA S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 3377/2016/CA1; “Duendes a la Siesta SRL S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 9634/2018/CA1; “FONTANA, ROSA y otro S/ Evasión Simple Tributaria”, Expte. N° 38995/2013/CA1; “Giancrisostemi, César Andrés S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 8394/2018/CA1; “Industria Metalmecánica





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

S.A. S/ Evasión Simple Tributaria”, Expte. N° 8395/2015/CA2; “Itilco SRL S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 650/2017/CA1; “Pacha SRL S/ Inf. Ley 24.769”, Expte. N° 9698/2014/CA2; “Somialca SRL S/ Infracción Ley 24.769”, Expte. N° 1941/2017/CA1; entre otras, a cuyos fundamentos nos remitimos *brevitatis causae*. Asimismo, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “VIDAL, Matías Fernando Cristóbal y otros s/Infracción Ley 24.769”, de fecha 28 de Octubre de 2021, resolvió en la misma línea que lo venía haciendo este Tribunal en los precedentes antes citados.

Que por todo lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde se confirme la resolución venida en apelación de fs.112/119, por lo aquí considerado.

Por ello; se

RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución de fecha 28 de Julio de 2021, que dispuso: “I) SOBRESEER en la presente causa a PEDRO BENITO BENEJAM en relación al hecho por el cual fuera indagado, delito previsto y penado por el Art. 1 y 2 incs. a), b) y d), de la Ley N° 24.769 (conf. modif. introducida por Ley N° 27.430), en mérito a lo considerado precedentemente, conforme lo normado por el art. 19 de la mencionada ley...”, conforme lo normado por el art. 336 inc. 3° del CPPN; atento lo meritado.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN

II) TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

III) REGÍSTRESE, notifíquese y oportunamente
publíquese.

NOTA: Se deja constancia que el Dr. Mario Rodolfo Leal participó
de la deliberación, emitió su voto y no suscribe la presente por
encontrarse en uso de licencia (art. 399 "in fine" del C.P.P.N.) San
Miguel de Tucumán, 9 de junio de 2022.

